

Las desarticulaciones de una modernización en crisis: revueltas populares en Venezuela

Yolanda SALAS

Fundación CELARG - Casa Rómulo Gallegos (Caracas)

Resumen

El trabajo, basado en el análisis de acciones y testimonios, se propone como objetivo central determinar las formas culturalmente específicas que estructuran el desorden protagonizado por el pueblo. Las revueltas populares y la desobediencia civil se organizan de acuerdo a tradiciones gestadas en la cultura. En el caso estudiado se destaca la ideología popular del cimarronaje, sobre la cual se sustenta una cultura de la rebelión, desarrollada a espaldas de la nación; se señalan, a la vez, las posibles resemantizaciones y distorsiones que se pueden estar gestando soterradamente en el interior de esa cultura de la rebelión.

Los sucesos históricos protagonizados por el pueblo: la cuenta regresiva ha comenzado

El mito de la estabilidad de la democracia venezolana quedó destruido el 27 de febrero de 1989, y la utopía de la «Nueva Venezuela» prometida por el entonces presidente en ejercicio, Carlos Andrés Pérez, fue saqueada de las bodegas de mentiras del populismo para pasearla, convertida en realidad, por las calles de Caracas. Tan sólo que fue una realidad desenmascarada, despojada de los disfraces retóricos de los discursos de las campañas políticas electorales. La «Nueva Venezuela» experimentada durante esa semana de violencia callejera ha sido el comienzo del pago de una deuda pendiente que el país tiene con una modernización desarticulada ocurrida en el seno de su sociedad. Para reseñar y comentar los acontecimientos hubo una hiperinflación del lenguaje, sin embargo, todavía se adolece de imprecisión para explicar los sucesos. Mucho ha quedado en el vacío y otro tanto, por degrado, ha sido desterrado al olvido.

Todo comenzó durante las primeras horas de la mañana del lunes 27, en las ciudades satélites de la Gran Capital: Guarenas, Guatire, La Guaira, Los Teques, cuando los usuarios del transporte público tuvieron que enfrentar el alza repentina y abultada de las tarifas. El aumento permitido, consecuencia del alza de precio de la gasolina, era una medida más de una serie de ajustes económicos anunciados recientemente por el gobierno para adecuarse al pago de la Deuda Externa y amoldarse a las condiciones o recetas «sugeridas» por el Fondo Monetario Internacional.

De la protesta y discusión de los usuarios con los transportistas, pronto se pasó a la toma de las calles: barricadas y fogatas de neumáticos paralizaron el tráfico. Los núcleos de protesta inmediatamente crecieron en número y composición. A los trabajadores y estudiantes que habían madrugado para dirigirse a sus sitios de labores se les unió lo que de allí en adelante los informes y reportajes llamaron «turba», «tumultos», «masas enardecidas», «pobladas», «pueblo». Comenzaron la quema y los destrozos de vehículos, continuaron la protesta y la toma progresiva de las calles. En el centro de la ciudad de Caracas, en la estación terminal de pasajeros, los estudiantes y trabajadores también protestaron. La manifestación creció; igualmente, el número de barricadas y hogueras colocadas en las calles. Bajaron los habitantes de los cerros ¹, los más pobres, que se unieron a los que ya se habían hecho dueños del Valle de Caracas. Luego se pasó al saqueo: las tiendas de comestibles fueron el primer blanco. Al día siguiente, el 28, la violencia era generalizada e imperaba principalmente en las zonas con alto índice de densidad poblacional. También los disturbios se habían irradiado a las ciudades del interior del país. El 28 fue también el día cuando se produjeron los mayores saqueos: comercios de artefactos eléctricos, grandes cadenas de supermercados y algunas fábricas fueron arrasados.

Se vivieron dos jornadas completas marcadas por un espíritu carnavalesco, la gente compró sin pagar, se vociferaron consignas contra el gobierno y el sistema. La fuerza de las «masas», de las «turbas» desbordadas en las calles no podía ser contenida por los cuerpos policiales. Por el contrario, la policía actuó con un espíritu condescendiente y hasta se hizo convidada de la revuelta. El gobierno se mostraba ausente y la dirigencia política enmudecida. La sorpresa ante la magnitud del desbordamiento lo mantenía fuera del escenario y liderazgo, no hubo conducción de «masas»: el pueblo era soberano.

¹ Es importante señalar que topográficamente la ciudad de Caracas está ubicada en un valle, insuficiente para dar cabida al acelerado crecimiento urbanístico y poblacional. Las colinas que lo bordean han sido los lugares alternativos de asentamiento: la población económicamente favorecida habita en urbanizaciones planificadas con todos sus servicios que reciben los distintivos de «lomas» y «colinas». Mientras que las clases marginadas, bajo las normas urbanísticas de la precariedad e improvisación, han construido sus viviendas en los «cerros». Muchas de estas barriadas ya tienen sus cuatro o tres décadas de fundadas.

36 horas más tarde, después de las primeras del 27, el Presidente Pérez suspendió las garantías constitucionales, dictó toque de queda por las noches y el restablecimiento del orden le fue encomendado a las Fuerzas Armadas. La voz del poder represivo del gobierno se hizo oír. El festín carnavalesco del saqueo y la ocupación de las calles y el espacio público por el pueblo se transformaron entonces en masacre. «La muerte tomó las calles». Las aguas desbordadas debían retornar a su cauce, gracias a la presencia y defensa de una institución, el ejército, preparada para la guerra y adiestrada para matar, no para controlar el orden público. Municiones como perdigones y balas de revólveres fueron sustituidos por balería para fusiles. Igualmente, los desórdenes comenzaron a tener sus nombres propios: rebelión, subversión, alteración ilegal del orden. Se había expedido, en consecuencia, carta blanca para reprimir y disparar a mansalva contra las barriadas habitadas por los sectores populares. Ellos eran la mayoría. Aquella minoría de la clase media que también se unió a los saqueos — y fue vista en acción en las imágenes transmitidas por la televisión — tenía bien resguardado su lustroso pasaporte de ciudadanía. Por ello, los disparos de los fusiles y armas de largo alcance ardieron para la mayoría.

El número de muertes después de los dos días de saqueos fue más alto, pero los cuerpos ya no ingresaban a los hospitales ni a la morgue. Como «los dueños del poder no hallaban qué hacer con tanta muerte» insepulta, abrieron varias fosas comunes en el Cementerio General del Sur, en un lugar conocido como La Peste (OCHOA A. 1992: 46). En camiones los llevaban al foso, sin urnas especiales, ni protocolo de autopsia, ni certificado de defunción. 327 muertos acusa la información oficial; las noticias internacionales registraron unos 1.500 muertos, un informe secreto de la DIM habla de 2.227 muertos por armas de fuego (SONNTAG 1992: 66), y los comentarios y rumores locales estimaron en 3.000 la cifra de caídos. La verdad debe andar entre el número de muertos que apenas tuvo tiempo de contar e identificar el personal de la morgue y las estimaciones aproximativas.

De esta carnicería quedan los recuerdos y los testimonios. Vecinos del cementerio vieron pasar centenares de cadáveres apilados en camiones para ser vaciados en el fosal. Quedan también los testimonios de los cuerpos exhumados a raíz de las acciones legales esgrimidas por el «Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo (COFAVIC)». Las exhumaciones apenas pudieron cumplir las etapas iniciales y la totalidad de la verdad no se conoció.

De una revisión de la literatura publicada se extraen diferentes actitudes ante los sucesos. Perplejidad de parte de algunos humanistas y científicos sociales que honestamente se declararon carentes de poseer en su saco de conocimientos la teoría que explicara los hechos. Otras voces autorizadas, tal vez un tanto más vanidosas, consiguieron la respuesta certera señalando las causas inmediatas que precedieron a los sucesos como la razón de la «explosión social» ocurrida. No estuvo ausente por supuesto el discurso de los amos del poder político y económico, quienes

hasta con cierta ingenuidad confesaron haber sido tomados por sorpresa y tildaron los disturbios como «una explosión espontánea o estallido social», «una guerra entre ricos y pobres» o la «guerra de pobres contra pobres»².

Las razones enumeradas son múltiples, en su mayoría miran hacia afuera o acusan a los gobiernos, a los partidos políticos y a la clase dirigente que han ejercido el poder durante los últimos 30 años. Entre las causas señaladas como determinantes están: 1) Las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional a pocos días de haberse celebrado la fastuosa toma presidencial de Carlos Andrés Pérez, electo por votación mayoritaria. Las medidas también contradecían las expectativas de los venezolanos que lo habían llevado al poder y esperaban de él la resurrección de la Venezuela opulenta, vivenciada durante su primer mandato. 2) La incancelable Deuda Externa y las exorbitantes sumas exigidas como pago de servicio de la misma a costo del deterioro social de la población. 3) La corrupción institucionalizada y generalizada en las esferas del poder político y económico y, en consecuencia, la falta de credibilidad en los partidos políticos y su dirigencia. 4) El lujo y la ostentación desplegados por un sector minoritario en las calles de una ciudad que acusa un 70% de su población viviendo en condiciones de pobreza atizaron el odio y resentimiento madurados durante muchos años de injusticia. 5) Por supuesto que en el balance de reflexiones posteriores al «estallido social» no estuvieron ausentes aquellas opiniones que desde antes venían denunciando los estragos de un capitalismo voraz, cuya meta era una distribución más equitativa de la pobreza entre los pobres para poder sustentar un crecimiento económico y una acumulación y crecimiento de capital más efectivos entre una minoría rica.

¿ Por qué tanta sorpresa ante un «estallido social» y principalmente ante la dimensión de su desbordamiento? Además, estas voces concientizadoras no hablaban en la soledad, tenían el respaldo y la compañía de un arraigado miedo cultural, profundamente asimilado por la colectividad residenciada en el Valle de Caracas que en su habla cotidiana ya había acuñado una corta frase enigmática: «el día que bajen de los cerros». El escucha, en el medio de lo no explicado, sabía reconocer el «quiénes» y el «para qué». Tal vez el uso mismo y continuado de la frase la hizo una residente más de la vida cotidiana; la hizo costumbre, la convirtió en rutina, en pertenencia, que como una suerte de exorcismo servía para conjurar y extirpar los demonios: de esta manera se alejaba la ocurrencia de los hechos, se anulaba la posibilidad.

² El primer aserto fue enunciado por el presidente Pérez y el segundo por el rector de la Universidad Central de Venezuela.

El espacio público se desordenó

El 27 y 28 de febrero de 1989 el pueblo tomó las calles, invadió y se apropió de lo privado y ajeno. Los siguientes días de marzo, la represión ocupó el espacio público para defenderlo; para que la defensa fuera efectiva allanó el espacio privado de las masas y con las balas penetró en las interioridades de sus viviendas y de sus vidas, segando algunas de ellas. La violencia, la muerte y el desorden gobernaron ambos espacios. Si embargo, es necesario examinar algunas de las palabras usadas con mayor frecuencia para describir los sucesos. Esta revisión desentrañará los juicios de valor y las nociones clasificatorias escondidas detrás de las palabras, a la vez que surgirán nuevos conceptos y alternativas de enfoque para evaluar los hechos.

«Motín», «estallido», «explosión», «sismo», «sacudón», «huracán social» han sido los recursos lingüísticos favoritos para nombrar los sucesos ocurridos; «espontáneo» el adjetivo para definir la forma de emergencia, y sobre sus protagonistas han recaído los apelativos de «masas», «turbas», «pobladas», «canalla», «multitud desbordada», «chusma de Gaitán», «turbas de Zamora», y «pueblo», entendido éste en su acepción peyorativa. El lenguaje mayoritariamente usado instituyó imágenes de cataclismo telúrico para definir la situación: sismo, explosión, estallidos que arrojaron de las entrañas «oleadas de masas humanas enardecidas», sin otra identidad que no fuera la pobreza y su exclusión del sistema instituido. Algo así como si una mayoría invisible se hiciera presente repentinamente. Cabe preguntarse con detenimiento quiénes componían esa masa. Dicho de otra manera, si esa voz genérica «pueblo» la descomponemos en «actores sociales» y le restituimos la facultad de acción y de protesta por sus derechos a una ciudadanía que le ha sido negada, ¿cómo se nos figura el cuadro de los acontecimientos? En el recuento testimonial de Elio COLMENARES (1989: 23ss), quien se define como un observador no imparcial de los acontecimientos, militante revolucionario y miembro del Partido Socialista de los Trabajadores, encontramos datos interesantes que permiten reconstruir los eventos bajo un enfoque que privilegie la identidad social de los actores y los mecanismos — informales — de organización de sus acciones. Reporta Colmenares que el sábado 25 de febrero, la Coordinación de Federaciones Estudiantiles discutió sobre la medida tomada por el gobierno referida al aumento de los pasajes del transporte colectivo; allí tomaron la decisión de realizar una intensa propaganda entre el pueblo, el día lunes 27 de febrero, en las estaciones o terminales de transporte urbano, convocando a la vez a una marcha al Congreso para el jueves 2 de marzo. Por otro lado, varios sindicatos plantearon la necesidad de un plan de lucha contra las medidas económicas. *Últimas Noticias*, un diario de circulación popular, el 26 de febrero, informaba que «pobladas» en cuatro núcleos urbanos en el interior del país (Mariara, Cagua, San Mateo y la Victoria) habían saqueado supermercados en busca de alimentos.

El «marzo merideño», ocurrido dos años antes del «Gran Sacudón» de Caracas, se dejó pasar sin mayor

pena ni gloria, aunque era una advertencia de lo que vendría posteriormente a nivel nacional. Mérida, una ciudad estudiantil y turística, ubicada en los Andes venezolanos, ya contaba con la experiencia de una intensa semana de protestas, saqueos y revueltas populares. De comparsas de estudiantes, que con espíritu festivo celebraban por las calles su graduación, se pasó a la muerte, al saqueo y al carnaval de sangre. Esta vez, el aumento de las tarifas del transporte urbano no fue el desencadenante de la violencia, sino la furia de un jurista, un abogado, formado para el ejercicio de la defensa de la Constitución y de los derechos ciudadanos, que interpretó los orines rociados por un estudiante a la entrada de su casa como un acto de incommensurable desafuero, que debía ser sancionado con la muerte. Sin el auxilio de juicios penales, a balazos disparados inmediatamente después de cometida la falta, el jurista cobró por los daños. La reacción de los compañeros del joven fue inmediata: arremetieron contra la propiedad del agresor, y de la fiesta carnavalesca se transitó a la revuelta popular.

De manera, pues, que el día lunes 27 de febrero, los habitantes de Caracas y sus alrededores no despertaron misteriosa y repentinamente enardecidos con fuertes deseos de protestar. Por el contrario, el germen de protesta se venía gestando, y por diversas vías se venía estructurando. Los estudiantes y trabajadores habían tenido sus espacios de cientización. Llama la atención el hecho de que efectivamente han sido los jóvenes de educación media y universitaria quienes han demostrado mayor arrojo en involucrarse en protestas que escenifican en las cercanías de sus centros de aprendizaje. Muchas veces estas protestas se convierten en «focos» de revueltas, donde estudiantes y «encapuchados»³ se enfrentan a la policía. La colocación de barricadas y hogueras en las calles, más la quema de vehículos, han sido acciones comunes a este tipo de protesta estudiantil.

El discurso de la cultura oficial ha construido una representación social de esa masa marginada que nos la hace figurar como un conglomerado sin voz, sin cuerpo, sin gestos y sin acciones propias. Lo que ocurrió el 27 y 28 de febrero reveló lo ignorado, los actores sociales velados simplemente magnificaron su comportamiento rebelde, cimarrón, gestado en una sociedad desarticulada. Si hubo sorpresa fue por ceguera. Esa abultada realidad social — habitante de los barrios marginales y populares que había sido escondida por los ojos enceguecidos de una modernización instaurada a costa de grandes préstamos al capital extranjero y sobre el despilfarro de los inmensos recursos naturales del país — bajó

³ «Encapuchado» es el término usado para referirse a una clase de participante que supuestamente se introduce en las manifestaciones estudiantiles, provisto de una conducta violenta, de piedras y otros artefactos, con el fin de transformar la protesta en revuelta. Recibe ese nombre porque haciendo rápido uso de la camisa o franela que lleva puesta, se cubre el rostro (se hace invisible) para protegerse de ser reconocido como protagonista de «actos vandálicos».

finalmente de su invisibilidad cerrícola para hacerse presente en el Valle de Caracas, tenido como el único espacio público posible, habitado imaginariamente por una minoría de ciudadanos conscientes de su papel modernizador. Pero no todo es tan simple. No toda la «poblada» estaba formada por los marginales y los desposeídos, pues las imágenes transmitidas por las emisoras de televisión, al inicio de los saqueos, mostraron una composición social mucho más heterogénea: allí se vio a la clase media cargando con una liviandad festiva pesados artículos electrodomésticos, aunque la participación de estos protagonistas rápidamente desapareció de las reseñas de los hechos. La escritura propició su disimulo y su olvido. Si los otros fueron mayoría y éstos minoría, también es cierto que allí se reprodujo la misma composición social de la población urbana. La participación de la clase media en los saqueos fue menor a semejanza de las estadísticas que reportan los estratos poblacionales. La invisibilidad de estos saqueadores rápidamente se ha ido institucionalizando para hacer recaer la culpa sobre la barbarie de una masa anónima asociada con los cerros, habitantes de la marginalidad y sinónimos únicos de saqueadores.

En esta sucinta exposición de las formas estructurantes del desorden, es importante reseñar la participación de la policía, ya sea en su papel de agente ordenador de los saqueos o como invitada a los mismos. Porque existió coordinación en los saqueos: la fuerza encargada del orden público cuidó que en muchos de ellos se diera una distribución equitativa de la riqueza, por ejemplo, a los hombres y adolescentes se les impidió el acceso para darle prioridad a las mujeres y niños, los abusadores eran concientizados para que dejaran algo a los demás, y una parte del botín se lo reservó la policía para su propio consumo. Estos fueron los pactos entre la violencia y el orden, que se rompieron cuando el ejército tomó las calles, para normalizar la situación mediante la represión: la sangre entonces desbordó las calles.

La «bajada de los cerros», esa suerte de descenso telúrico que trae a la mente la idea de cataclismo geográfico, tiene otra lectura en la recepción colectiva de ese sector social sobrecogido por un arraigado miedo histórico⁴ a la posible ocurrencia de una revuelta protagonizada por esa masa — amorfa — sin nombre ni cuerpo social específico, que el discurso de la modernidad acoge bajo rótulos e ideales muy genéricos, como libertad, igualdad, democracia, aunque en su praxis modernizadora le niega el acceso al progreso y bienestar social. La sentencia «cuando bajen de los cerros» era de vieja circulación colectiva antes del 27 de febrero, debe haberse acuñado a medida que los cerros se poblaban, después de la caída del último dictador Pérez Jiménez, en 1958, cuando se inicia un proceso modernizador que no pudo contener ni absorber la migración hacia las ciudades. Los «cinturones de miseria» se formaron y agrandaron, al extremo de conseguir hoy en día una gran heterogeneidad en ellos: los barrios de vieja data y los de reciente formación. En los primeros ha fructificado una generación de nuevos venezolanos, entre los cuales es frecuente encontrar profesionales; en los últimos moran los «sin techo», los que

han llegado tardíamente. Allí venezolanos y extranjeros de otros países latinoamericanos comparten o delimitan sus espacios, y todos en mayor o menor escala se ven continuamente amenazados por el hampa nacida en su seno.

La multitud no bajó desguarnecida, entre la gente se encontraban personas armadas que abrían paso y con sus instrumentos forzaban las puertas de protección de las tiendas. Los «azotes» de los barrios», los «antisociales» llamados también «malandros» y los moradores de la vida cotidiana de los cerros, esta vez, compartieron no sólo un mismo espacio geográfico sino que se unieron solidariamente en una tarea común. Paradójicamente, cuando la represión comenzó y el ejército allanó los barrios hasta donde pudo penetrarlos, surgieron, entonces, los «francotiradores», quienes resistían con sus armas y municiones, apostados en las azoteas de casas o bloques de edificios. Esta resistencia costó caro al pueblo, pues el ejército disparó indiscriminadamente contra las viviendas de quienes ningún vínculo real tenían con el francotirador. Lo que en un principio fue protección se convirtió en horror.

Se ha señalado como un elemento propagador de los disturbios y los saqueos a los «motorizados». Ellos, en sus motos, formando grupos, fueron vistos recorriendo la ciudad, haciendo circular las últimas noticias relacionadas con los disturbios. A semejanza de su quehacer diario, fueron eficaces propagadores de información, tan sólo que esta vez no cargaban mensajes de casas comerciales o de oficinas gubernamentales sino de sus congéneres de clase. Con sus motos encabezaban grupos de gente, a quienes les abrían camino e instigaban a tomar las vías públicas. Su liderazgo fue más efectivo que el de las voces autorizadas de los partidos políticos, quienes hasta ese momento se habían mantenido en silencio y ausentes de los medios de comunicación.

Los signos operantes más evidentes contra los cuales se dirigieron los saqueos del 27 y 28 de febrero fueron (1) los abastos y supermercados. El pillaje funcionó como un acto de justicia por propia mano ejercida por la gente contra los especuladores

⁴ El miedo a las revueltas populares está cíclicamente documentado en la historia venezolana. Ya en tiempos de la Colonia se le temía a la posible ocurrencia de levantamientos de negros semejantes a los protagonizados en Haití y en otras islas de las Antillas. Durante la guerra de la Independencia, 1814 fue un año sangriento de guerra civil entre los blancos y las castas de color, que se confundían entre sí bajo los designios proclamados ya sea por los del bando «realista» o «patriota». Fue el año del sanguinario Boves, quien bajo los emblemas de la bandera española, ejerció, más bien, el papel de igualador de castas a fuerza de degollinas colectivas de blancos. Tres años más tarde, en 1817, el miedo a las insurrecciones populares surge de nuevo. Esta vez, la amenaza provenía de un «patriota», Piar. Ya consolidada la independencia e instaurada la República, en 1860, Ezequiel Zamora es ultimado por una bala de rifle de proveniencia anónima. Zamora, líder popular relevante del proceso revolucionario venezolano, encabezaba las banderas reivindicativas de las capas populares, en nombre de los liberales, durante la Guerra Federal.

y acaparadores de alimentos ⁵, (2) las casas comerciales, como una respuesta para satisfacer necesidades consumistas incentivadas por la sociedad global. La vida cotidiana, de este modo en un afán justicialista, se apropió del espacio público, lo hizo suyo, y la propiedad privada la convirtió en asunto público.

Otro aspecto importante de señalar es que los barrios cuentan con sus formas de organización vecinal, compuesta en células o núcleos de asociación, que tienen a su cargo incentivar formas de autogestión para resolver los problemas locales de seguridad y sobrevivencia. Los líderes de estas células, elegidos por los vecinos, en algunos casos, pertenecen a los partidos políticos o son personas independientes con capacidad de capitalizar la simpatía de los demás. Son voces autorizadas a quienes se les escucha y atiende. El impacto que estas voces líderes hayan podido ejercer en la gente de los barrios durante los acontecimientos de febrero queda por determinar, pero resulta ingenuo subestimarlas. Igualmente sería importante ahondar en la influencia modeladora que han ejercido los dueños de altares o líderes de centros espiritistas religiosos sobre la conciencia social y política de los habitantes de los barrios populares.

Nuestro enfoque de los acontecimientos, hasta el momento, ha privilegiado las acciones y formas de organización de una revuelta espontánea popular, en el entendido de que estos actos de rebelión no son tan espontáneos sino que se han venido gestando en el interior de la cultura, y muchas de sus acciones forman parte de su propia tradición de protesta y rebeldía. La siguiente parte de la ponencia se centra en destacar algunos de los basamentos de esta ideología popular de la subversión, anclada en el cimarronaje, tomando como referencia la parahistoria construida por el imaginario popular en la esfera del rito y las creencias mágico-religiosas. Por razones de espacio y tiempo, me limitaré a señalar exclusivamente uno de estos espacios históricos narrados por los «espíritus» africanos que descienden y poseionan médiums actuantes en un Centro Espiritista enclavado en un populoso barrio de Caracas ⁶. La «Corte Africana», una de las tantas cortes de espíritus operantes allí, ocupa un lugar preponderante en el sistema de creencias y en la configuración del espacio mágico-religioso. Los espíritus africanos, por la fuerza que poseen, son invocados para realizar curaciones y solventar necesidades de los creyentes que acuden a su consulta. Los mitos históricos sobre los que se sustenta esta Corte Africana ofrecen un excelente ejemplo para establecer las articulaciones entre la ideología de la subversión operante en el estrato popular urbano y la revuelta popular. Los espíritus de ancestro africano que componían esta Corte han sido renovados por una nueva camada de espíritus, que tienen su particular manera de construir su historia en concordancia con las expectativas culturales de sus adeptos ⁷. El mito que narra el origen de esta Corte cuenta la historia de la madre Erika, una africana de los tiempos de la esclavitud, quien tuvo varios hijos. Algunos de ellos fueron llevados a la isla de Trinidad, donde Bárbaro Africano, poseedor de conocimientos especiales, se retiró a una cueva de la cual nunca más salió, pero le transmitió sus conocimientos a su hermano Centauro Africano. Este quedó encargado

de esparcir la enseñanza de esa gran familia africana, los Estaus, que rigen la Corte Africana del Centro Espiritual, objeto de nuestro estudio. Esta renovación de los espíritus africanos viene acompañada de una germanización de sus nombres, además de una intensificación del espíritu de cimarronaje sobre el cual centra su origen. Apenas unos años atrás, espíritus de guerrilleros de los años sesenta dominaban en este Centro, además del espíritu de un conocido bandido social que robaba a los ricos para favorecer a los pobres.

Un seguimiento de la evolución de los espíritus imperantes en el centro religioso marca pautas significativas para comprender cómo el entorno está asumiendo el proceso político del país, y hasta cierto punto ofrece indicios de ciertas respuestas populares en gestación. En otras palabras, allí se evidencian qué tipo de mecanismos de adaptación, subversión o rebelión se están desarrollando. En este sentido, resulta significativa la sustitución del cimarronaje de la guerrilla por el cimarronaje de una africanización germanizada. Otra corte de espíritus operante en este específico centro religioso-espiritista, la Corte Negra, toma como emblema el signo de la cruz gamada o esvástica, pero con sus cuatro brazos acodados invertidos, para diferenciarse y exaltar el espíritu de paz. Aunque una paz simbólica, construida sobre los principios del cimarronaje, la rebelión y la exclusión, que en cualquier momento puede invertir nuevamente los brazos acodados del signo, que antes había modificado.

Esta ponencia ha tenido como objetivos centrales, en primer lugar, determinar la estructuración y las formas de ordenamiento del desorden protagonizado por el pueblo. Las revueltas populares espontáneas se tienen como formas prepolíticas de protesta que no engranan en el sistema global ni conducen a

⁵ Actos de justicia por propia mano están sucediéndose con frecuencia en los barrios populares de Caracas. Hasta el 12 de abril de 1995 se habían producido seis linchamientos de malhechores y delincuentes, residentes también de la marginalidad. La opinión pública ha condenado de asesinatos a estos actos de justicia popular cometidos por los vecinos de los barrios. Ante la inacción del Estado, la gente ha tendido a organizarse solidariamente en defensa de sus vidas contra la violencia y desarticulación nacida en su mismo seno. (Cf. *El Diario* (Caracas), 25 de enero de 1995, p. 3, y 12 de abril de 1995, p. 5).

⁶ El trabajo de campo y recolección de información se realizó en un centro religioso-espiritista, que se desvía en algunos aspectos del gran culto popular a María Lionza. Sin embargo, pese a los deseos de diferenciarse de la práctica común, los rituales realizados por los cultores de este Centro no rompen significativamente con los patrones tradicionales del culto. Lo hemos tomado como referencia, pues observamos allí una reelaboración y actualización de la ideología del cimarronaje que no se hace tan evidente en otros centros más conservadores.

⁷ Estas notas forman parte de un trabajo más extenso que he llamado «Biografía de los espíritus y su conciencia histórica», el cual se centra en la captación y recolección de la contrahistoria o parahistoria, tal como se expresa en el imaginario popular, esta vez, narrado por la voz de los espíritus.

cambios revolucionarios. Sin embargo, estas formas rebeldes de desorganización social no son tan primitivas si se enfocan como desobediencia civil protagonizada por actores sociales. El miedo a la revuelta se ha incrementado notablemente entre la sociedad global, y los titulares de diarios, con frecuencia, citan palabras de los políticos o de personas influyentes que advierten la necesidad de tomar en cuenta al pueblo en medio de la crisis económica que atraviesa el país. El miedo a la revuelta es un arma que la «masa» tiene en sus manos. Miedo controlador para unos. Terror como defensa para los otros. Las palabras de un líder de un centro religioso son significativas: «El 27 y 28 de febrero nos enseñó que debemos organizarnos para hacer las cosas. La próxima vez no va a ser saqueo, va a ser algo más importante, más fuerte». De esta forma, la «multitud» ha ganado un espacio de poder, a la vez que ha reducido y limitado el espacio del discurso hegemónico. Este, por miedo, teme a la crítica y a la acusación. Se ha destacado también la ideología popular del cimarronaje sobre la cual se sustenta la cultura de la rebelión desarrollada a espaldas de la nación, señalando, a la vez, las posibles resemantizaciones y distorsiones que se pueden estar gestando soterradamente en el interior de esa cultura de la rebelión.

Bibliografía

COLMENARES Elio

1989 *La insurrección de febrero. Un análisis para la lucha revolucionaria.*- Caracas: Ediciones La Chispa.- 123 p.

EL Nacional

1989 *El día que bajaron de los cerros.*- Caracas: Editora el Nacional y Editorial Ateneo de Caracas.- 119 p.

1990 *27 de febrero. Cuando la muerte tomó las calles.*- Caracas: Editora el Nacional / Editorial Ateneo de Caracas.- 133 p.

OCHOA ANTICH Enrique

1992 *Los golpes de febrero. 27 febrero 1989. 4 febrero 1992 (de la rebelión de los pobres al alzamiento de los militares).*- Caracas: Fuentes Editores.- 169 p.

SONNTAG Heinz Rudolf y Thaís MAINGÓN

1992 *Venezuela: 4-F 1992. Un análisis sociopolítico.*- Caracas: Editorial Nueva Sociedad.- 107 p.

Résumé

Ce travail, fondé sur l'analyse d'actions et de témoignages, se propose comme objectif central de déterminer les formes culturelles spécifiques qui structurent le désordre dont le peuple est l'acteur. Les révoltes populaires et la désobéissance civile s'organisent en accord avec des traditions enracinées dans la culture. Dans le cas étudié ici, c'est l'idéologie populaire du cimarronaje, sur laquelle repose toute une culture de la rébellion, développée à l'insu de la nation, qui se trouve mise en évidence, ainsi que les possibles re-sémantisations et distorsions en gestation souterraine au sein de cette culture de la rébellion.

Summary

The main objective of this paper based on the analysis of actions and testimonies is to determine specific cultural forms that give structure to the disorder led by the people. Popular revolts and civil disobedience are organized according to traditions inherent in their culture. The case studied here shows that the popular ideology of the cimarronaje offers the basis for the culture of rebellion whose development has taken place inadvertently. Possible «re-semantisation» is shown along with distortions which may be generated subterraneously in this culture of rebellion.